



Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Expte nº: 49154/2023 AML

Autos: “NESTLE ARGENTINA S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva del Expte. Nº 49154/2023

Buenos Aires,

I.- Surge de autos que mediante la Resolución 2022-887-E-AFIP-DEIMPR#SDGTLSS por la cual AFIP no hizo lugar al pedido de revisión incoado por el contribuyente NESTLE ARGENTINA S.A. contra la Resolución 2021-357-E-AFIPDVJUDA#SDGTLSS del 24/06/2021, conforme los términos expuestos en el dictamen que antecede.

II.- Contra ello, el recurrente interpuso el recurso de apelación. Asimismo, se hizo saber a la rubrada, que la admisibilidad del recurso de apelación estaba sujeta al depósito del importe de la deuda que en definitiva se estableciera, actualización e intereses, de conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente el que debería hacerse efectivo dentro de 30 o 45 días según el apelante se domiciliare en CABA o el interior del país (art. 9 ley 23.473 sustituido por el art. 14 de la ley 26.063 y art. 15 de la ley 18.820 y sus modificaciones). Al respecto, en el escrito recursivo expresa haber depositado \$87.173 en concepto de aportes y contribuciones, \$307.403,31 en concepto de intereses resarcitorios al 29 de agosto de 2022 y 87.173 en concepto de multa por falta de denuncia de trabajadores.

Por su parte, AFIP por Nota Nº 290/23 (DE LTRD), informa que la apelante acreditó el depósito parcial de la deuda.

III.- Así, corresponde señalar que el art.15 de la ley 18.820 (modificado por ley 23.473) expresamente dispone que "...deberá depositarse el importe de la deuda resultante de la resolución administrativa; su omisión producirá la deserción del recurso", y el art. 39 bis del decreto ley 1285/58 modificado por el art. 26 de la ley 24.463 dispone que deberá depositarse el importe resultante de la resolución impugnada.

Con relación a las disposiciones de diferentes leyes que supedita la concesión del recurso a que previamente se pague el importe pertinente, reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene declarado que no resultan violatorias del art. 18 de la Constitución Nacional, si no se ha alegado y probado que aquella reviste desproporcionada magnitud con relación a la concreta capacidad económica del recurrente.

Idéntico criterio es el que prevalece en materia tributaria pues ha admitido la validez constitucional de la exigencia de pago previo de los tributos y recargos



pertinentes, como requisito de la intervención judicial, con la salvedad de supuestos de monto excepcional y de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, doctrina que ha sido extendida para interpretar los arts. 15, segunda parte, de la ley 18.820 y 12 de la ley 21.864, (ver fallos 215:225 y 501; 219:668; 247:181; 250:208; 256:101; 285:302; 287:101; 295:62 y 240; 296:40 y 57; 307:1753).

En síntesis, dentro de este orden de ideas, es dable señalar que el Más Alto Tribunal de la Nación ha aceptado la posibilidad de eximir de la exigencia del pago previo a la apelación en supuestos de excepción que contemplen situaciones patrimoniales concretas de los afectados a fin de evitar que aquel pago se traduzca en un real menoscabo del derecho de defensa en juicio. A tal efecto estableció, con el objeto de evitar que las excepciones desvirtúen la aplicación del principio general, que lo que ha de valorarse para eximir el pago inmediato en supuestos de multa no son las dificultades de su oblación derivadas de desequilibrios financieros o de circunstancias particulares del giro de los negocios de la demandada, sino que a través de ella, se verifique un importante desapoderamiento de bienes de la demandada. (doctrina de Fallos 247:181; 205:20), o una desproporcionada magnitud entre el monto a depositar en relación a la capacidad económica del apelante y la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontar dichas erogaciones ( Fallos 256:38; 261:101).

Ello así, quien pretende eximirse del pago exigido por las normas en cuestión debe aportar acabada y fehaciente prueba acerca que se encuentra alcanzado por alguna de las hipótesis de excepción de creación pretoriana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Dicho ello, cabe señalar que la Resolución 79/98 en su art. 10.1 y su modificatoria 3329/2012 establece que para el cumplimiento del requisito previsto en el art. 15 de la ley 18.820 y sus modificaciones, el contribuyente podrá solicitar que se practique liquidación de la deuda, dentro de los diez (10) días de notificado de la resolución respectiva, en el caso de domiciliarse en la ciudad Autónoma de Buenos Aires y dentro de los quince (15) días, de domiciliarse en el resto del país. Es de destacar que, por un lado la solicitud de liquidación no interrumpe ni suspende el plazo para apelar establecido en el punto 10.4 y de no efectuarse tal solicitud, el apelante deberá practicar la liquidación y proceder al pago del monto resultante.

Ello así, se observa a fs. 181/182 –ver DEO: 11702638- solicita liquidación de deuda el 23 de junio de 2022. Surge de autos que el organismo fiscal notificó a la contribuyente la reliquidación efectuada el 12 de agosto de 2022 –ver fs 87 DEO: 11702617-

Sentado ello, cabe señalar que la nota referenciada en el acápite II, el organismo fiscal informa que el monto del pago previo ha sido depositado en forma parcial. Se observa que por nota 290/23 de (DE LTRD), AFIP informa que a raíz del pedido de reliquidación, se confeccionó el acta F. 8400/L N° 0990002022050844502, de la que surge





## Poder Judicial de la Nación

**CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1**  
la intimación al pago de una deuda de \$87.173 en concepto de capital, \$308.484,15 en concepto de intereses y \$87.173 en concepto de multa, cuya sumatoria alcanza a \$482.830,15.

Así las cosas, surge de autos y del informe del organismo fiscal que la parte actora efectúa un depósito por un importe menor -\$481.749,31- al monto determinado de la deuda.

Por lo expuesto, atento a que la recurrente no ha efectuado el pago total del depósito y que además no prueba de modo efectivo y concreto hallarse comprendido en las situaciones de salvedad previstas para supuestos de monto excepcional y de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, (conforme la doctrina del Alto Tribunal citada precedentemente), corresponde declarar desierto el remedio procesal intentado.

IV.- Dado el resultado alcanzado, y la particularidad de la temática abordada, que pudo válidamente generar en la parte actora la creencia de que contaba con un mejor derecho a litigar o, al menos, de lograr esa respuesta en el ámbito judicial. Por esa razón, las costas deben distribuirse en el orden causado (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, este TRIBUNAL RESUELVE: I- Declarar desierto el recurso interpuesto; II- Costas por su orden.

Regístrese, notifíquese y oportunamente remítase.

